

## *La fatalidad de la violencia*

Santos Juliá, El País, 04/01/1998

Venimos de una tradición en la que el recurso a la violencia con el propósito de incidir en la política ha gozado de amplio prestigio. No hay que remontarse hasta el siglo XIX para encontrar los rastros de esa estima, que en el nuestro son abundantes; ni es, por lo demás, un prestigio privativo de los medios izquierdistas y obreros sino que atraviesa las barreras ideológicas y de clase hasta impregnar toda la cultura política. Desde 1808, la violencia se ha considerado por progresistas y moderados, socialistas y católicos, anarquistas y fascistas, como una prenda de salvación: el nuevo mundo no alumbraría sin ríos de sangre fluyendo entre dolores de parto.

Las culturas políticas son por fortuna mudables y lo que ayer resultaba fascinante se tiene hoy por vana retórica, si no por desvarío y locura. En nuestro siglo, Barcelona fue la rosa de fuego mientras el País Vasco, terminadas las guerras carlistas, raramente soportó una violencia similar. A la muerte de Franco, sin embargo, mientras en Cataluña ninguna organización terrorista pudo echar raíces, en Euskadi, ETA no sólo se perpetuó sino que logró conquistar en iglesias y plazas públicas el culto que se reserva a los mártires: sus muertos, aunque se hayan suicidado, se celebran como héroes nacionales. ¿Por qué esas trayectorias tan disimilares?

Por supuesto, ante tamaña cuestión, no hay una sola respuesta que valga; pero un hecho permite aventurar una hipótesis. El nacionalismo catalán rechazó desde el primer momento y de forma contundente parlamentar con los estrategas del terror. Jordi Pujol no careció de coraje, ni temió ser tildado de españolista, por mostrar sin titubeos, saliendo a la calle, de qué lado estaba cuando comenzaron a producirse actos de terrorismo en Cataluña. Bien es verdad que los nacionalistas catalanes intervinieron activamente en la elaboración de la Constitución, la votaron y han mantenido hacia ella una lealtad básica, fiando al tiempo y a la acción política la consecución de sus objetivos nacionales.

No ha sido así en Euskadi. El PNV ha cultivado desde 1978 un prejuicio de ilegitimidad respecto del Estado que le ha impedido situarse, desechando cualquier ambigüedad calculada, frente a las estrategias de terror surgidas en su propio suelo, a las que siempre se ha buscado una causa metahistórica, una especie de conflicto ancestral del que la violencia no sería sino un efecto derivado y necesario. Esta posición le ha llevado a tomar a ETA como una fatalidad: ETA está ahí, es un hecho, se dice, como señalando un fenómeno de la naturaleza. Y, sin duda, ETA está ahí. Tan está ahí que ha podido recurrir durante 30 años a un género de terror desconocido en nuestra historia sin miedo a perder el apoyo de un porcentaje nada desdeñable de la población vasca. No se necesitan demasiadas luces para entender que ése es, además de un hecho de moral colectiva, un hecho político.

El callejón sin salida en que se meten quienes, tras recordar lo obvio, proponen una salida política imaginativa sin pillarse los dedos en explicar su contenido y dejan en segundo plano el hecho moral inextricablemente unido a las estrategias de terror, consiste en aceptar la fatalidad de la violencia y propugnar, en consecuencia, el tendido de puentes hacia sus artífices. Sabemos por experiencia que el desarme político y moral de los demócratas conduce a ceder la iniciativa a los totalitarios. La tragedia radica en que, a pesar de saberlo, la aceptación de la fatalidad de la violencia y los cálculos que cada cual -clero católico, dirigentes políticos, líderes sindicales, organizaciones real o sedicentemente pacifistas- se hace respecto a las ventajas a corto plazo que de ese fenómeno pueden obtener, bloquea desde hace años la posibilidad de una política única frente al terror. Por eso, formular con el año nuevo el augurio de un frente democrático contra el terrorismo suena inevitablemente a cuento de los Reyes Magos.

## *Después del crimen*

Santos Juliá, El País, 08/02/1998

Poco después de los últimos asesinatos, Ardanza se revuelve contra sí mismo y contra todos los políticos, por los que dice sentir vergüenza, en su singular y políticamente vacío ejercicio de autoflagelación; Arzalluz, eternamente enojado pero siempre castizo en el uso de la lengua castellana, se planta ante la multitud y reta a los más osados a levantar el dedo si tienen algo que proponer; los concejales del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián acusan a un alcalde socialista de hacer el juego a HB por no ordenar que se retiren las fotos de varios presos de ETA; el consejero de Interior del Gobierno vasco se enzarza en una riña con el ministro del ramo del Gobierno español por cuestiones de competencia, sobre el cuerpo de policía que debe garantizar la seguridad de los concejales del PP en el País Vasco.

Así están las cosas. Normal, en democracia; no hay por qué asustarse. La política democrática es por definición competitiva y los políticos están precisamente para recoger y expresar las diferencias de opinión y de intereses características de una sociedad plural. Nada más lógico que se produzcan enfrentamientos y debates ante cualquiera de los problemas que preocupan a los ciudadanos. Lo que pasa es, sin embargo, que una gran mayoría de ciudadanos no se ven representados en esas discusiones desde el momento en que han hecho repetidamente en la calle la experiencia de la unidad frente a ETA. La han hecho de la única forma posible en una democracia: ocupando por unas horas el espacio público para mostrar su voluntad unitaria. Ocurrió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y ha vuelto a ocurrir con los del matrimonio Jiménez-Becerril: la gente sale a la calle con el sentimiento de que esos crímenes han trazado una línea divisoria, un nosotros y un ellos sin posibilidad de comunicación alguna.

Toda la cuestión política que tenemos pendiente radica en saber si es posible que el impulso procedente de esas manifestaciones puede ser recogido, sin quiebra de la unidad, por unos partidos caracterizados más por su propensión a magnificar los conflictos que por su voluntad para resolverlos. La experiencia reiterada de

los últimos años dice que no, que es imposible; que entre la tarde en que el espacio público sirve de escenario a una manifestación unitaria y la mañana en que los partidos vuelven a ocupar toda la escena, la unidad se diluye y el mismo aire que antes había recogido el clamor unitario comienza a llenarse de agrias acusaciones y de mutuos reproches.

De ahí, la sensación de impotencia que impregna el ambiente el día después del crimen y que puede convertirse en prólogo de dos guiones igualmente catastróficos: que un sector de los manifestantes se organice para responder a la guerra con la guerra; o que cunda el desistimiento y la dejación ante lo que se considera fatal e irremediable. Ambos guiones se han escrito hasta su dramático final en otros tiempos, aquí y en todas partes, y es sólo una prueba de la madurez de vascos y españoles demócratas que no hayan encontrado ningún eco todavía entre nosotros las voces clamando venganza ni los lamentos invitando al desistimiento.

Pero, si se quiere evitar esas dos salidas sin horizonte, no parece que quede abierta más que una vía: convertir el acuerdo de Ajuria Enea en un pacto de acción común. Si los ciudadanos que se manifiestan en las calles pueden sentir un impulso unitario por encima de sus legítimas discrepancias políticas, los partidos que los representan, estén o no por la construcción de una nación vasca separada del Estado español, deberían ser capaces de llegar a un acuerdo más allá de la mera declaración de intenciones. Eso, cuando la política se hacía en la calle, se llamaba pacto de unidad de acción. Es complicado, pero es el único camino que queda por explorar si no se quiere que el impulso unitario de los ciudadanos en la calle se disuelva en la impotencia o se convierta en prólogo de una larvada guerra civil.

## *Españolistas inconfesos*

Santos Juliá, El País, 08/03/1998

Junto a la reiterada propuesta de negociar con ETA o con su brazo político -"sobre lo que sea", como decía en un alarde de responsabilidad el presidente de Extremadura- corre por ahí la especie de que quienes rechazan como ilusoria semejante política serían españolistas unitarios avergonzados de su propia posición y, por tanto, inconfesos. Necesitados como están los promotores de cualquier negociación de visualizar las partes del futuro contrato como extremos del que ellos serían el centro o como platillos de una balanza de la que ellos serían el fiel, tienen que medir a quienes rechazan la política de negociar sin condiciones con idéntica vara que a quienes recurren el terror con el objetivo de alcanzar fines políticos. La falta de comprensión de los primeros bloquea las posibles salidas al ancestral conflicto en que se debaten, al parecer contra su voluntad, los segundos. Poco les falta para afirmar que la culpa de que los asesinatos continúen recae no más que sobre el cerrilismo de los asesinables.

¿Dónde están, si puede saberse, esos españolistas inconfesos que cierran con su obstinada negativa los caminos de pacificación? Porque si algo caracteriza la evolución del Estado español durante los últimos veinte años es que ha procedido a un reparto territorial de poder sin precedente en nuestra historia. Este hecho, que se destacará sin duda como el comienzo de un proceso irreversible de federalización, ha tenido lugar sin que haya tropezado con obstáculos insalvables, sin tensiones que no pudieran ser asumidas por el propio Estado, sin resistencias en la opinión pública y sin que haya surgido ni una sola organización política nacionalista española dispuesta no ya a enviar sus escuadras a luchar contra el enemigo, sino ni siquiera a armar la mitad de la gresca de quienes para posibilitar que se abra un proceso de pacificación matan a pacíficos concejales o se dedican a vandalizar municipios.

Todavía más: en las masivas concentraciones de ciudadanos, cada vez que se ha producido un crimen particularmente horrendo, no se ha elevado jamás ninguna voz vengativa, exigiendo que se pague a los asesinos con la misma moneda que ellos administran a

quien se cruza en su camino. Hemos visto tantas cosas durante estos años que apenas llama la atención un hecho capaz por sí solo de desmontar todas las teorías psicologistas sobre el comportamiento de las multitudes. Se tenía a las manifestaciones de masa como proclives a dejarse guiar por sentimientos primarios, por emociones y por impulsos irracionales. Pues bien, todas las manifestaciones con las que los ciudadanos españoles han respondido a los crímenes de ETA ofrecen el insólito espectáculo de una masa que discrimina, que rechaza a quienes enarbolan banderas de venganza, que es capaz de introducir una distinción entre vascos y ETA. Nadie lo diría, pero así es: son multitudes silenciosas que cuando hablan es para reclamar únicamente libertad, para decir "basta ya" o para gritar, como ocurrió en la respuesta al asesinato de Tomás y Valiente, "vascos, sí; ETA, no".

Esto es así porque, al mismo tiempo que ciertos nacionalismos han multiplicado su presión, sus exigencias, y han enarbolado la amenaza de la violencia o han utilizado ese arma como un chantaje, el nacionalismo españolista unitario ha desaparecido como estado de opinión y como fuerza política. Contra lo ocurrido en Francia, Italia o Alemania, no se ha producido en España ningún rebrote de la derecha nacionalista, derrotada sin paliativos en todas las elecciones convocadas desde 1977. Y como no existe esa formación política, y como la opinión pública anda bien lejos de cualquier nostalgia unitarista, los voceros de la negociación, tan comprensivos con las razones de la violencia y tan afanosos en sus intentos de pacificar esa extraña guerra con un solo bando que mata, no encuentran otro argumento que esgrimir el espantajo de los "inconfesos" para mejor vender su averiada mercancía.

# *Frente nacionalista*

Santos Juliá, El País 24/05/1998

Todo el mundo escuchó con emoción las palabras del presidente del Gobierno vasco cuando dijo que ETA seguía "teniendo cómplices entre nosotros" y todos aplaudimos su denuncia concreta, taxativa: "Se llaman Herri Batasuna". Mucho antes, el que se tiene como mascarón de proa del barco nacionalista llegó a denunciar como una actitud agresiva, injusta y antidemocrática la identificación entre nacionalistas y vascos. El acuerdo con ellos brotó más que fácil, cordial: con Ardanza, cuando afirmaba que la coalición Herri Batasuna estaba en el diseño mismo del crimen, o que lo estimulaba, o que lo provocaba; con Arzalluz, cuando extendía las plurales identidades vascas más allá de las fronteras del nacionalismo. Muchos de nosotros no hemos dicho nunca otra cosa.

Pero ahora los dirigentes del nacionalismo vasco se han encarado con ese público que había aplaudido sus palabras y le han dicho: Ah, pero ¿de verdad se habían creído ustedes todo aquello? Quía, hombre; lo que nosotros decimos es que sólo hay una manera de ser verdaderos vascos, la nacionalista, y por lo que respecta a HB, tan nacionalistas son como nosotros, tan vascos de verdad, por tanto. Y como todavía queda por este gallinero de Madrid alguna gente que nunca ha tenido como cualidad del talento traspasar las fronteras del ultraje y del insulto, permitan los dirigentes nacionalistas que se les responda con la misma decepción manifestada por Azaña ante una de las múltiples piruetas políticas de Unamuno: "Dispense usted, señor: le habíamos creído por su palabra". Dispensen ustedes, señores del PNV: habíamos creído por su palabra que HB era cómplice de ETA; habíamos creído por su palabra que es una agresión injusta y antidemocrática identificar lo vasco con lo nacionalista.

Como Unamuno, quienes han cambiado de palabra son ellos y ellos habrán de ser quienes den la razón de su nueva política. Mientras tanto, es lógico pensar que la evolución del PNV en lo que va de año ha consistido en propugnar un entendimiento de todo el

nacionalismo, HB incluida, con objeto de forzar a los partidos vascos de ámbito estatal a sentarse al otro lado de una mesa de negociación que permita a ETA dejar de matar sin perder la cara ante los suyos. Esta estrategia de frente nacionalista debe entenderse como la respuesta del PNV a la mayor presencia pública de ciudadanos vascos que han denunciado, con riesgo de sus vidas, la falta de libertad en su país. La voz de la gente en la calle, los manifiestos, las convocatorias por parte de quienes no se resignan a doblar la cabeza ante las amenazas, han llegado a inquietar, ante la proximidad de las elecciones, a los dirigentes del PNV.

Cuando han pasado ya varios meses de su puesta en práctica, es evidente que la estrategia del frente nacionalista no ha servido para detener la mano de los asesinos ni para obstaculizar el ejercicio de la violencia colectiva a grupos organizados a la manera de las escuadras de asalto del periodo de entreguerras. ETA sigue matando y los grupos paramilitares incrementan su capacidad de bloquear municipios, impedir la circulación, cerrar tiendas, cobrar impuestos y levantar luego tranquilamente el cerco antes de la llegada de una policía dotada con toda clase de artilugios, pero políticamente tan perpleja que se limita a tomar nota del estropicio. La cesión a estos grupos de una atribución tan fundamental del poder público como es el monopolio de la violencia legítima constituye una prueba inapelable del fracaso del Gobierno vasco para salvaguardar los derechos individuales de sus ciudadanos.

Hay algo más devastador que esta cesión de la iniciativa política y "militar" al ala extrema del nacionalismo. Toda estrategia de frente nacionalista provoca inevitablemente la escisión de una sociedad en comunidades enfrentadas. Por eso, las últimas manifestaciones de los dirigentes del PNV son algo más que una amarga decepción; son una amenaza directa a la convivencia pacífica entre vascos.

## *El camino de la derrota*

Santos Juliá, El País, 28/06/1998

ETA no es una mafia; ETA no es la banda del Tempranillo. ETA es un ejemplo de nacionalismo con una carga revolucionaria muy fuerte; lo que busca es una Euskadi unida, independiente y socialista. Éstas son definiciones textuales que de ETA nos ha proporcionado hace muy pocos días el presidente del PNV. Estaríamos, pues, ante la santa trinidad sobre la que se construyeron los movimientos fascistas del periodo de entreguerras: nación, socialismo, revolución. ETA es, de acuerdo con el análisis de Arzalluz, una organización que propugna una revolución nacional-socialista; una organización nazi.

No hacía falta que Arzalluz nos aleccionara sobre la naturaleza política de ETA para convencernos de lo que la misma ETA con sus actos nos revela cada día. ETA no es sólo una organización nacional-socialista porque lo sea su discurso político o por la parafernalia con la que adorna sus apariciones públicas. Lo es porque, como los nazis, se mofa de las instituciones democráticas y, como ellos, añade a esa burla el escarnio a sus víctimas. Lo es sobre todo porque sus atentados contra la democracia no tienen otro objeto que amedrentar a la población mostrándole quién tiene el poder radical, el poder sobre la vida y la muerte: si callas o cumples lo que yo digo, vivirás; si hablas o actúas contra lo que yo ordeno, morirás.

Al asesinar a concejales del PP, ETA se hace las mismas cuentas que los partidos nazis de entreguerras. Las democracias, más resistentes de lo previsto frente a las revoluciones comunistas o sindicalistas, son débiles ante los movimientos nacionalistas: hay mucha más gente dispuesta a sacrificar la democracia ante el altar de la nación que ante el ideal de la sociedad igualitaria. Pero la pasividad o el apoyo de un sector de la población nunca ha sido lo más decisivo en las tácticas nazis de conquista del poder. Lo que de verdad ha importado históricamente es que los nacional-socialistas siempre han encontrado en las clases políticas dirigentes de los Estados democráticos una complicidad que les ha permitido incorporarse a las instituciones parlamentarias sin necesidad de

renunciar al ejercicio del terror en la calle.

Así ocurre también en Euskadi. A la vez que define a ETA como un movimiento nazi, Arzalluz ha mostrado su desdén hacia el espíritu de Ermua y ha culpado al Gobierno de no acabar con el terrorismo por interés electoral. Es decir, se ha negado a situar al PNV al frente de una movilización suprapartidaria contra ETA y ha cargado sobre el PP la responsabilidad por los asesinatos de sus propios concejales. De esta manera, al rechazar un frente democrático contra ETA y desplazar la culpa de los verdugos a las víctimas, el PNV repite exactamente la política que sirvió a los partidos conservadores para empedrar el camino hacia la quiebra de las democracias en los años veinte y treinta.

Pues, en efecto, la división de los demócratas ante la ofensiva mortífera del nacionalismo revolucionario vasco se traduce en la defensa que del diálogo y la negociación con el brazo político de ETA formula Arzalluz en sus últimas declaraciones. El giro estratégico de su partido se ha plasmado en propuestas de pacificación, encaminadas a incorporar a las instituciones democráticas a un movimiento cuyo objetivo declarado consiste en destruirlas, y ha desembocado en la formación de un frente nacionalista con el patético aditamento de Izquierda Unida. Con el señuelo de incorporar a HB al Parlamento vasco, y fiado, como Von Papen, de que en un frente nacionalista puede desempeñar el papel hegemónico, el PNV ha dado un paso de gigante hacia la derrota de la democracia: los nacional-socialistas ya están en las instituciones y aún siguen mandando en la calle; ya votan leyes y aún siguen matando al adversario político.

ETA no tiene todavía todo el poder en Euskadi, pero el matonismo de los secuestradores de Ortega Lara no revela únicamente cierta catadura moral; revela, sobre todo, una moral de victoria.

# *Una jugada maestra*

Santos Juliá, El País, 20/09/1998

"Estamos ante un ciclo que termina y otro que empieza", decía el lehendakari Ardanza hace unas semanas para que nadie se escandalizara por haber calificado de obsoleta y anquilosada a la Constitución. El tiempo pasa rápido y aunque, en la canción, veinte años no sean nada, en la historia constitucional española desde la muerte de Fernando VII pueden serlo todo. Demasiado ha durado ya la Constitución de 1978: liberados de los miedos del pasado, Ardanza invita a los vascos a mirar con arrojo el futuro y a desprenderse de ese traje raquítico y anticuado a que ha quedado reducida la Constitución después de veinte años.

Si, en lugar de ir directos al punto 7 de la declaración anexa, se lee todo su largo comunicado, se verá que ETA no dice hoy otra cosa: como el lehendakari, también ETA afirma que se abre una "nueva fase llena de esperanza"; como el lehendakari, y con idénticas palabras, también ETA asegura que "el marco institucional vigente en Euskal Herria está agotado"; como el lehendakari, también ETA se dirige a los vascos como exclusivos depositarios de soberanía. Los redactores del documento, vanguardia de la nueva construcción de Euskal Herria, anuncian su tregua a la vez que dan por liquidado "el autonomismo constitucional", antes defendido por los abertzales extraviados del PNV, y proclaman la vigencia del único camino: la soberanía en la autodeterminación y la territorialidad.

Mientras el PNV afirma sin tapujos el agotamiento de una Constitución siempre combatida por ETA, ETA incorpora a su estrategia política el concepto de alto el fuego siempre solicitado por el PNV. Ésa ha debido de ser la materia de las negociaciones entre el PNV y HB, aceleradas desde el 17 de marzo, cuando el PP y el PSOE rechazaron el plan de paz de Ardanza, y culminadas con la Declaración de Lizarra, que afirma con lenguaje más melifluido lo que ETA dice por derecho y Ardanza propone con retórica castiza: es hora de sentarse a la mesa y "abrir el melón de la Constitución". Que ETA no haya creído necesario cumplir la primera etapa prevista

en Lizarra y haya pasado directamente a la segunda indica que el acuerdo sobre el destino del melón es más sustancial de lo que nadie podía sospechar o que ETA tenía prisa en declarar su alto el fuego de manera unilateral.

¿Por qué las prisas? Es indudable que ETA atraviesa un momento difícil, con la pérdida de su aliado irlandés, el acoso del Gobierno francés, el desmantelamiento de sus redes de financiación por la policía española y la creciente irritación de una población cansada de tanto crimen; es cierto también que su brazo político no ha podido responder a la firme acción de la justicia con movilizaciones en la calle. Así las cosas, el PNV, en funciones de hermano mayor, acude solícito para ayudar a que los chicos de ETA dejen las armas sin perder la cara ante sus gentes y de una tacada modifica por completo la escena de la política vasca. La Declaración de Lizarra, seguida a los tres días por la de ETA, ha permitido al conjunto del nacionalismo vasco, arropado por el gallego y el catalán casualmente de gira por Bilbao, recuperar la iniciativa política con una promesa de paz a cambio de Constitución, sin que importe nada lo que digan los "de ahí abajo".

Era fundamental para esta estrategia que las dos bases del acuerdo entre nacionalistas -dejar de matar y proclamar el fin de la Constitución- se hicieran públicas simultáneamente y poco antes de las elecciones. Los nacionalistas inician la campaña insuflando esperanzas, mientras el PSOE y el PP se enzarzan en su peor trifulca a cuenta de la guerra sucia y sus secuelas. Así se demuestra que la paz y la soberanía es asunto que concierne exclusivamente a los vascos, que deberán pronunciarse sobre la cuestión dentro de unos días. Bloqueados los partidos de ámbito estatal, los nacionalistas, perplejos hace un año, pasan a la ofensiva y convierten una debilidad orgánica en un triunfo estratégico. Su nuevo ciclo comienza con una jugada maestra.

## *Conversaciones de paz*

Santos Juliá. El País, 27/12/1998

Éste que ahora termina quedará en la memoria de todos como el año en que ETA anunció el cese incondicional e indefinido de sus acciones violentas. El carácter incondicional de la decisión puso de manifiesto la inanidad de toda una larga historia de búsquedas de contactos, tomas de temperatura, envío de emisarios y otras audaces iniciativas encaminadas a que ETA abandonara las armas a cambio de no se sabía muy bien qué cosas. Como era evidente hasta para los más lerdos, la única conclusión que la organización terrorista podía deducir del anuncio de la llegada de mensajeros era la de una extrema debilidad, casi una llamada de socorro, del Gobierno. La respuesta no podía ser otra que golpear con más fuerza en la seguridad de que el débil siempre se muestra generoso con el fuerte cuando éste deja de pegarle.

Dos años después de la ruptura de todos los contactos, y sin necesidad de recibir mensaje alguno del Gobierno, ETA decidió abandonar las armas cubriendo la retirada con la botadura del Pacto de Estella. Es pronto para tener cabal idea de las causas de ese desistimiento, pero algo ha debido de contar el hecho de que el Gobierno se negara a establecer contactos, poner termómetros y enviar carteros al domicilio de la organización. El coste de esa negativa fue enorme: todavía no hace un año que caían abatidos en una tranquila calle de Sevilla un concejal del Partido Popular y su mujer. Pero el Gobierno no sólo no reconsideró su política, sino que se reafirmó en ella a pesar de los catastróficos augurios de quienes juzgaron como una temeridad la firmeza política y la fortaleza judicial en la condena de la Mesa de HB, el desmantelamiento de las redes de financiación y el cierre del diario Egin.

Han pasado tres meses de la decisión de ETA y el carácter indefinido del cese de la violencia parece en vías de convertirse en definitivo. Como se supone que esa transición no podrá lograrse sin conversaciones de paz, de nuevo todo el mundo habla de contactos, y no faltan candidatos a presentarse como intermediarios. Es curioso, sin embargo, el grado de desconcierto en que navegan estos voluntarios, acostumbrados como estaban a ser gestores de una situación en la que la muerte se daba por

descontada. El PNV, por ejemplo, ha perdido hasta tal punto su lugar que cada vez que abre la boca suena como a lejano eco de HB, tanto es su temor a la pérdida de hegemonía en el frente nacionalista que él mismo ha impulsado; y la alta clerecía vasca no sabe literalmente qué hacer, si predicar reconciliación sin arrepentimiento, pedir perdón con la boca chica, o echarse ceniza sobre la cabeza para que Dios misericordioso no la vomite por su tibieza a la hora de manifestar solidaridad con las víctimas. Todos, sin embargo, se muestran acordes en una idea: es preciso iniciar cuanto antes, con valentía, conversaciones de paz.

¿Conversaciones de paz? Bueno, así será si así les place, aunque aquí no haya declarada ninguna guerra a Euskadi. De lo que se trata, naturalmente, es de que ETA anuncie la transformación de lo indefinido en definitivo. ETA querrá hacerlo rodeada de toda la pompa habitual en tan solemnes ocasiones: un intercambio previo de comunicados exponiendo sus condiciones, contactos exploratorios de ministros plenipotenciarios de ambas partes, una mesa para sentarse frente a frente con el Estado, una negociación a dos bandas con el Gobierno, algún canje de víctimas o prisioneros como prueba de buena voluntad, una especie de tratado, una firma, un anuncio público, una celebración. Así suelen desarrollarse las conversaciones de paz.

El Gobierno, que hasta ahora ha conducido con serenidad y firmeza su política antiterrorista, sin atajos y sin buscar brillantes resultados a corto plazo, tendrá que ver si semejante escenario es el más adecuado para perseguir el único fin posible de las anunciadas conversaciones: restañar en Euskadi las heridas abiertas por tanto crimen y evitar una irreparable fractura de la sociedad.